

**Por Rubén Moreira Valdez**

Diputado federal

@rubenmoreiravdz

México es reconocido a nivel internacional como uno de los países con mayor riqueza biológica, lo que nos posiciona dentro de las 17 naciones megadiversas. Aunque el territorio mexicano ocupa apenas el 1.5 por ciento de la superficie terrestre del planeta, alberga entre el 10 y el 12 por ciento de la diversidad de especies existentes a nivel mundial.

Pese a esto, en México la presencia del Estado en materia de conservación suele ser raquitica. Son las comunidades, en muchas ocasiones, quienes asumen un papel central en la defensa de

Salvar las tortugas



nuestros ecosistemas y de las especies que los habitan. Un ejemplo de esto se encuentra en las costas de Oaxaca, donde opera Vivemar, una sociedad cooperativa integrada por habitantes de la región que decidió organizarse para frenar el deterioro del litoral, la contaminación y la histórica extracción ilegal de huevos y carne de tortuga marina.

Cada año, cuatro de las siete especies de tortugas marinas del mundo arriban a las playas de

Oaxaca para anidar. Entre ellas, la tortuga laúd (*Dermochelys coriacea*), una de las especies más grandes del planeta y actualmente en peligro crítico de extinción. Su supervivencia se ve amenazada por múltiples factores, entre ellos la contaminación de sus hábitats, la pesca de arrastre, las embarcaciones, la agenda inmobiliaria, la cacería ilegal y el saqueo de nidos y crías.

Entre 2017 y 2022, la organización logró liberar más de 11

millones de crías de tortugas marinas de diversas especies, todas en distintas categorías de riesgo. A estas acciones se suma la limpieza de casi cinco toneladas de basura y la protección directa de 27 kilómetros de costa, en zonas sometidas a una intensa presión inmobiliaria. Vivemar forma parte de la Red de Humedales de la Costa de Oaxaca y desarrolla un enfoque integral de conservación, que incluye educación, monitoreo científico, reforestación de manglares y el uso de tecnologías como drones y geolocalizadores. Este modelo muestra que las comunidades no solo protegen la biodiversidad, sino que asumen los costos económicos, sociales y personales de sostener ecosistemas clave para el país..